



SNI, privilegios y generosidad

Héctor Vera

1 de junio de 2020

En días recientes se publicaron dos artículos —uno [firmado](#) por Mayte Muñoz y Efraín Lazos en *El Economista*, otro por Luis Fernando Granados en este [espacio](#)— a propósito de la polémica por una petición a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores para que donaran uno o tres meses de su estímulo al Patrimonio de la Beneficencia Pública. Este llamado revivió viejos debates sobre el SNI. Estos textos reproducen una serie de lugares comunes (implícitos y no cuestionados) acerca de los integrantes del SNI sobre los que quisiera reflexionar aquí. (Aclaro que no puedo ser considerado un observador neutral en este asunto. Soy miembro del SNI desde 2015, actualmente en el nivel 2.)

Tras leer los artículos de Granados y Muñoz y Lazos queda la impresión de que los miembros del SNI están dominados por una irracionalidad incontenible contra el gobierno federal y que su único interés para participar en la vida pública es asegurarse de que les den dinero. La imagen que dibujan de los investigadores es algo como Ebenezer Scrooge con bata de doctor Frankenstein.

Los investigadores del SNI son más activos en la vida política y social del país de lo que usualmente se les reconoce. Los debates sobre las acciones de los miembros del SNI no deberían confundirse con lo que opinamos sobre la pertinencia del SNI como institución. El SNI no debería existir. Tendría que ser sustituido por un esquema que garantice salarios suficientes y dignos —no condicionados por una evaluación— para todos los académicos. La brecha que separa distintos tipos de académicos (principalmente entre los de tiempo parcial y los de tiempo completo, y entre los que tienen acceso a estímulos y los que no) debe ser reducida. El principal obstáculo para conseguir esto es la crónica insuficiencia de recursos para las

instituciones de educación superior, producto de las perenes políticas de austeridad. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por partes.

Si aspiramos a tener un retrato menos distorsionado primero hay que mencionar algunas cosas que deberían ser bien conocidas, pero que al parecer se ignoran u olvidan cuando se opina sobre los investigadores del SNI. 1) El SNI no está conformado por un bloque homogéneo de profesores e investigadores. 2) El mundo académico en México está marcadamente estratificado; el SNI es sólo un elemento de esa estratificación. 3) Ser miembro del SNI no significa, necesariamente, estar fuera de la precariedad laboral. 4) Hay miembros del SNI que tienen la distinción nominal de ser “investigadores nacionales” pero que no reciben dinero del SNI pues no cuentan con una adscripción de tiempo completo. (Hasta uno de cada 15 investigadores podría estar en esta situación.)^[1] 5) Ser miembro del SNI no significa, necesariamente, vivir holgadamente. 6) Nadie en México se ha hecho rico por dar clases en una universidad y publicar artículos científicos. 7) No todos los miembros del SNI son parte de la elite universitaria ni todos los miembros de la elite universitaria forman parte del SNI. 8) No todos los miembros del SNI son opositores al actual gobierno (en muchos casos es incluso lo opuesto). 9) Es falso que los miembros del SNI que hoy critican al gobierno federal fueran condescendientes con pasadas administraciones.

Cada uno de estos puntos merecería ser tratado con detalle, pero demanda más espacio del aquí disponible. (No trataré aquí el importante tema del proceso de evaluación para ingresar y permanecer en el SNI y otros programas de estímulos. Varios hemos investigado ese tema y hemos expresado nuestras críticas. Por ejemplo [aquí](#), [aquí](#) y [aquí](#).)

* * *

El SNI es uno de los blancos predilectos cuando se habla casualmente sobre los males que aquejan a las instituciones de educación superior mexicanas. Entre los varios prejuicios sobre los miembros del SNI está el cacareado desinterés de los investigadores por el impacto social de su trabajo —el cliché del académico reducido a “productor de *papers*”. La naturaleza del trabajo especializado de investigación proyecta una imagen de solipsismo. Alguien que pasa años enteros indagando sobre “la aritmética maya en el periodo posclásico” o sobre “la interacción de los clorofluorocarbonos con otros gases atmosféricos” resulta a simple vista un individuo desconectado de los sufrimientos que aquejan a las personas fuera de la torre de marfil. Pero lo que podemos ver, una y otra vez, es que en situaciones concretas esos mismos investigadores que muchos ven como “abstraídos de la

realidad” traducen su conocimiento especializado en posturas políticas puntuales. Lo hacen, digamos, documentando cómo la introducción de un tren que atravesara la península de Yucatán destruiría vestigios arqueológicos, o calculando cómo la construcción de una refinería contribuiría a agudizar los daños por el cambio climático. Curiosamente, cuando hacen eso son los mismos políticos que antes les pedían mostrar “compromiso social” quienes dicen a los científicos que no se metan en lo que no les importa, que regresen a sus cubículos y que se queden calladitos. Ejemplos de esto sobran, particularmente en este sexenio.

Es importante poner énfasis en esto, porque la imagen del investigador cuya única actividad práctica es escribir artículos y cuya única pasión es su dinero del SNI es una de las mentiras más repetidas en el debate público sobre el papel de los científicos. El interés social y la acción política de los investigadores son intensos e ininterrumpidos. Lo que debe entenderse es que se trata de acciones donde no actúan todos ellos al unísono, no practican un tipo de política que se canalice a través de los partidos políticos, ni sus intervenciones aparecen en las primeras planas de los periódicos.

Es sorprendente qué fácil se le olvida a algunos el trabajo de los geólogos para diseñar la alerta sísmica que ha salvado (y salvará) muchas vidas humanas, de los biólogos que alertan sobre el efecto nocivo de los pesticidas, de los ecólogos que denuncian la pérdida de biodiversidad, de los químicos que documentan los peligros para la salud que conlleva el *fracking*, de los especialistas en ciencias atmosféricas que promueven la reducción en la emisión de clorofluorocarbonos, de los ingenieros forestales que se movilizan contra la tala clandestina, de los nutriólogos que se enfrentan a las compañías refresqueras, de los lingüistas que trabajan en la preservación de lenguas mesoamericanas, de los antropólogos que suenan las alarmas sobre despojos a comunidades indígenas, de especialistas en temas de género que promueven leyes que permitan abortos seguros y gratuitos, de los historiadores que demandan la protección y el libre acceso a las fuentes documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Huelga decir que muchos de ellos participan en muchas de esas actividades aunque no les retribuirán en nada para sus evaluaciones del SNI.

Es sorprendente que Granados y Muñoz y Lazos no vean (u omitan) todo esto. Más aún porque lo hacen en medio de la pandemia, donde la participación de los investigadores es muy difundida (incluyendo la del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, SNI 2). Todos los días se publican noticias de matemáticos y demógrafos construyendo modelos estadísticos sobre los posibles contagios futuros, de genetistas secuenciando el genoma de las sepas de

Sars-Cov 2 presentes en México, de laboratorios de varias universidades reconvertidos para hacer pruebas de Covid, del Cinvestav desarrollando pruebas de 15 minutos, de centros Conacyt construyendo ventiladores, de biotecnólogos colaborando para encontrar una vacuna, de psicólogos elaborando guías para que el público pueda lidiar con el estrés y la depresión causadas por la cuarentena, de pedagogos sugiriendo actividades para la enseñanza de los niños que están reclusos en casa.

Si queremos entender mejor las acciones y actitudes de los científicos tenemos que entender que son individuos que no tienen nada de extraordinario. No son mejores ni peores que otras personas. Tienen intereses venales, como cualquiera; pero también, como cualquiera, son personas que en instancias específicas son movidas por la solidaridad y la empatía, y demuestran recurrentemente estar dispuestos a poner sus habilidades al servicio de causas comunitarias.

* * *

Vayamos ahora a algunos aspectos concretos del debate sobre la invitación del Conacyt para que los miembros del SNI donaran sus estímulos. Granados sostiene que “pocos sectores de la sociedad han vivido el confinamiento en mejores condiciones que los profesores-investigadores: sin la más mínima afectación salarial y aun con la reducción de algunos de los mecanismos de control laboral impuestos por las burocracias (como registrar su asistencia al salón de clases)”. Esto sólo ocurre en algunos casos. Las mujeres y los investigadores jóvenes (aquellos que tienen hijos pequeños en casa) no se sienten liberados de ningún control. Tener que dar clases desde casa, con sus hijos pidiendo atención al otro lado de la puerta, ha producido niveles de estrés laboral muy superiores a los que significaba asistir al salón de clase. Sin contar que son precisamente las mujeres y los jóvenes investigadores quienes ocupan en mayores números los niveles de ingreso más bajos del SNI y son quienes acostumbran estar en las posiciones de vulnerabilidad laboral que aquejan a algunos miembros del sistema. Para ellos esta epidemia sólo ha reforzado las desigualdades. Y muchos de ellos serán próximamente evaluados por el SNI y sus ingresos estarán en juego; si no pudieron publicar nada durante estos meses, no será un problema que le importe al Conacyt. Y no puedo dejar de mencionar aquí a los más de mil quinientos miembros del SNI que trabajan en el campo de ciencias de la salud y que realizan su labor, muchos de ellos, en los hospitales; me imagino qué cara pondrían si les decimos que “pocos sectores de la sociedad han vivido el confinamiento en mejores condiciones” que ellos.

También difiero de la opinión de Granados en la que califica como “exabrupto risible” las declaraciones de muchos investigadores que sintieron el correo del Conacyt como chantaje o extorsión. Para mí el correo se sintió como un llamado de Emilio Azcárraga para que los trabajadores de Televisa donen “voluntariamente” al Teletón. En particular porque esta administración del Conacyt ha sido visiblemente agresiva con los miembros de la comunidad científica que cuestionan sus lineamientos. Una pregunta repetida entre los miembros del SNI fue “¿y si no realizo la donación afectará mi evaluación del SNI el próximo año?” Quizá era una preocupación sin fundamento, pero lo repetido de la pregunta lleva a una cuestión crucial: ¿a qué se debe que los investigadores no confíen en los directivos del Conacyt? Muñoz y Lazos se hacen esa pregunta y para ellos sólo hay dos posibles causas por las que pudo haber sospechas:

1) Que el documento en el cual se hizo la petición estaba mal hecho. Esto es cierto, estaba mal hecho. No sólo contenía datos incorrectos, sino que tenía los visos de ser un fraude. Antes que ninguna queja, lo primero que suscitó el documento fueron inquietudes sobre su posible veracidad. Tan fue así que dos días después, el viernes 16 de mayo, el mismo Conacyt tuvo que enviar un correo aclaratorio cuyo primer punto leía “El documento de invitación es legítimo”. Otros dos días más tarde (18 de mayo), el Conacyt envió un tercer correo que informaba que todo “Se trató de una iniciativa de buena fe, formulada desde esta Secretaría Ejecutiva del SNI, para la que no fue consultada la Presidencia de la República. [...] Con el fin de evitar malentendidos anunciamos por este medio que la retiramos formalmente”. Al final todo el asunto sucedió en tres correos enviados en un lapso de cuatro días. Dos días con una información confusa que el Conacyt no confirmaba ni desmentía, una aclaración y, pasado el fin semana, la cancelación. Tristemente esto no sorprende, no ha sido la primer debacle comunicativa en el Conacyt en el último año y medio.

2) El segundo motivo que proponen Muñoz y Lazos sobre la recepción que tuvo el documento es que entre los miembros del SNI hay una “disposición previa a rechazar cualquier llamamiento venido del actual régimen”. Esto es manifiestamente falso en muchos casos (incluido el del propio Efraín Lazos, SNI 2), pues entre los miembros del SNI abundan los defensores entusiastas del actual régimen.

Es extraño que Muñoz y Lazos no imaginaran otras razones por las cuales el gobierno federal y los directivos del Conacyt hayan perdido la confianza de los investigadores, habiendo tanta tela de donde cortar. No se les ocurrió pensar que quizá un factor han sido las acciones negativas e insultos que la comunidad científica ha recibido de esta administración. Menciono algunos episodios que me vienen a la memoria: primero amenazar con una reducción y después estancar el

presupuesto de las universidades públicas desde el inicio del sexenio; quitarle a los académicos del Cinvestav una importante prestación (seguro médico); amenazar con eliminar los viáticos y permisos para asistir a congresos internacionales porque sólo lo usan para hacer “turismo político”, según este reporte de las [palabras](#) del presidente; llamarle “colgados de la nómina” a los jóvenes de las Cátedras Conacyt; reducir drásticamente el número de becas posdoctorales del Conacyt; mantener en la incertidumbre el futuro de los centros públicos de investigación; hacer cambios en los reglamentos del SNI y aplicarlos retroactivamente para marginar de las comisiones a quienes han criticado a la directiva del Conacyt; hacer votaciones para las comisiones evaluadoras del SNI utilizando métodos que no aseguran transparencia (¡para la más reciente votación usaron SurveyMonkey!), etcétera. Quizá si el nuevo gobierno no hubiera emprendido esas acciones, los investigadores hubieran sido más receptivos al llamado del Conacyt para donar al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

En su texto, Granados alude a una actitud “farisea” de los miembros del SNI, pues supone que sólo se manifiestan en la arena pública cuando sus ingresos monetarios personales parecen estar en riesgo. No dudo que sea el caso de muchos de ellos; tampoco veo en ello algo reprobable. El salario de los académicos —al igual que el sobresueldo del SNI que antes formaba parte de su salario y fue convertido en una transferencia condicionada— no es una dádiva del gobierno ni de las universidades; es la forma monetaria en que esos trabajadores son compensados por vender su fuerza de trabajo. No hay nada inmoral en que un trabajador proteste cuando considera que está amenazada esa compensación. Cuantimás porque, como ya dije, una proporción importante de los miembros del SNI no tienen una posición acomodada.

Lo que el texto de Granados no menciona es que muchos investigadores no protestaron por el llamado a la cooperación, simplemente no deseaban materializarlo por la vía sugerida por el Conacyt. Muchos expresaron su desconfianza a darle ese dinero al gobierno y prefirieron hacer sus donaciones a organizaciones no gubernamentales o a proyectos como *Dona un kit, protege a un residente*, de Fundación UNAM. También señalaron la falta de visión (o decisión) del actual gobierno para combatir las causas tanto de la desigual distribución de riqueza como de la insuficiencia presupuestal que sufre el gobierno para enfrentar las crisis económicas y de salubridad provocadas por la epidemia. Sus argumentos destacan que el gobierno de López Obrador hace recortes en el presupuesto de las instituciones públicas y amenaza algunos derechos laborales de trabajadores al servicio del estado (como el aguinaldo), pero se niega a promover una política

impositiva progresiva donde paguen más impuestos las personas más ricas del país. Esta no es una queja banal.

* * *

Recordemos que en México la mitad de la riqueza está acumulada en las manos del tres por ciento de la población. En esas condiciones, el adecuado financiamiento de las instituciones públicas de salud, educación y cultura no se conseguirá con rifas, reduciendo salarios de los trabajadores al servicio del estado ni pasando el sombrero entre investigadores universitarios. La solución está en atender la desigualdad ahí donde se produce en sus proporciones más agudas y donde se reproduce estructuralmente. Ese tres por ciento más rico de la población debe contribuir más para que los programas sociales puedan ser suficientes y sostenibles. No es tolerable que empresarios como Ricardo Salinas Pliego, quien ha recibido contratos millonarios del actual gobierno federal, adeuden cifras millonarias al fisco.

Pongamos esto en perspectiva. Si los 30 mil investigadores que pertenecen al SNI donáramos cada uno tres meses de estímulo se juntarían 1,650 millones de pesos. Si Ricardo Salinas Pliego pagara lo que debe de impuestos, el gobierno contaría con una suma veinte veces mayor: 32 mil millones de pesos. Dicho de otra manera, con lo que le adeuda Salinas Pliego al fisco podría pagarse la totalidad de la nómina del SNI durante casi cinco años completos. Algo no anda bien cuando un gobierno autodenominado como “progresista” pide generosidad de la clase media para paliar los efectos de la voracidad de la clase alta que ha sido consentida por los gobiernos de derecha, centro e izquierda.

Quienes se benefician de que el debate público se concentre en la generosidad o mezquindad de los trabajadores académicos asalariados no son los más pobres del país, sino los más ricos. Ellos son quienes producen y se benefician de la desigualdad. Actualmente casi nadie en la izquierda invoca los principios de la economía política, pero una de las cosas que esa disciplina enseñó fue que la lógica de la desigualdad y la explotación en el sistema capitalista no se fundamenta en los montos de los salarios, sino en la posesión del capital. Vivimos en una sociedad capitalista (y el actual gobierno no ha dado ninguna señal de querer cambiar eso; hoy es hasta riesgoso para los trabajadores del gobierno hablar positivamente de los comunistas). La pregunta, entonces, es ¿cómo podemos paliar la desigualdad dentro de una sociedad capitalista? La respuesta más eficaz que se conoce es imponiendo impuestos al capital y aplicando impuestos progresivos.

¿Si se cobraran más impuestos a los más ricos de México es algo que afectaría a los miembros del SNI? Quizá a una minoría entre ellos. Y si es así, que así sea. Un gobierno con suficientes recursos para afrontar crisis y garantizar servicios básicos no existirá apelando a la bondad de los trabajadores académicos, ni estrangulando el presupuesto de las instituciones públicas. Sí lo hará redistribuyendo la riqueza ahí donde está más concentrada.

He intentado mostrar aquí lo que considero es una imagen más adecuada de los *miembros* del SNI. Mas nada de lo que aquí he dicho debe tomarse como una defensa del SNI. El SNI no debería existir. Todos los académicos universitarios deberían tener un ingreso suficiente y digno. Todo profesor (incluidos los de asignatura) debería percibir un salario que cubra adecuadamente sus necesidades, y eso no ocurre hoy en día. Ninguno debería tener sus ingresos condicionados a evaluaciones. Cualquier profesor universitario que trabaje 40 horas a la semana, sin importar su tipo de nombramiento, debería recibir un salario que sea al menos equivalente al total (salario + sobresueldo) que reciben los investigadores SNI 1 en promedio.

Por supuesto, ningún secretario de Hacienda permitiría que eso sucediera. Aunque sería un salario adecuado, ni este gobierno ni los precedentes han estado dispuestos a destinar los recursos suficientes para que todos los trabajadores académicos reciban una compensación cabal por la labor que realizan. Ha resultado más fácil para los gobiernos condicionarle ingresos justos al 5 por ciento de los trabajadores y decir que el resto no se lo merece porque no son productivos, no tienen posgrados o no publican en revistas arbitradas.

En el actual esquema todos los académicos pierden: muchos pierden mucho, algunos pierden algo. Entre los escasos beneficiados por la situación actual está el propio Conacyt, que puede influir a una comunidad de investigadores que tendría poco interés en el Consejo si no hubiera SNI. Los grandes ganadores son los gobiernos (federal y estatales) que se ahorran miles de millones de pesos dándole sueldos de hambre a la mayoría de los profesores y repartiendo unos complementos condicionados para unos cuantos de ellos. Y lo mejor de todo para los gobiernos es que en los debates sobre la desigualdad académica es más común que los profesores se recriminen entre ellos: los miembros del SNI culpan a los otros de ganar poco por no tener talento o méritos; los marginados acusan a los que reciben estímulos de ser una elite mezquina. Es raro que en esas discusiones se nombre lo que causa del mal de todos ellos: las políticas de austeridad.

Al contrario de lo que muchos esperaban, esto no va a cambiar en el presente sexenio. La austeridad que el actual gobierno llama “republicana”, aunque está inspirada en una ideología contraria al neoliberalismo, tiene los mismos efectos de la llamada “eficiencia administrativa” de los gobiernos del PRI y el PAN entre 1988 y 2018. Esta aparente paradoja no es sorprendente; no es raro que ideologías opuestas se traduzcan en prácticas análogas. No importa qué nombre se le de a los recortes presupuestales que estrangulan a las instituciones públicas y pauperizan a los servidores públicos; sus efectos son funestos para la educación superior.

Cuando pienso esto no sale de mi mente la imagen de los hombres más ricos de México cenando con el presidente de la república en Palacio Nacional, intercambiando dinero, apretones de mano y boletos para la rifa de un avión.

[1] Sigo las cifras de los padrones de beneficiarios del SNI de 2018 y 2019. En 2018 había 996 investigadores marcados como “Sin institución”. Esta etiqueta desapareció en el padrón de 2019, pero tiene dos mil investigadores donde aparece en blanco el casillero de “Institución”.